



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Jesús Emilio Carmona Rúa
DEMANDADO	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
RADICADO	05001-31-05-008-2021-00174-01
TEMA	Aplicación convención colectiva - pensión convencional
DECISIÓN	Confirma sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **042** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JESÚS EMILIO CARMONA RÚA** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-**, con radicado 05001-31-05-008-2021-00174-01

• **SUSTITUCIÓN DE PODER:**

En los términos de la sustitución de poder realizada por el doctor **JUAN CARLOS GAVIRIA GÓMEZ**, se le reconoce personería suficiente para actuar al doctor **JOSÉ ALEJANDRO VÉLEZ SALDARRIAGA** identificado con cédula de ciudadanía 1.026.146.510 y tarjeta profesional 277.367 del CSJ, para continuar representado los intereses de la parte actora.

• **PRETENSIONES:**

El demandante pretende se conceda la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo para los trabajadores del ISS, a partir del 15 de agosto de 2016, la cual debe ser liquidada con base en

el salario promedio indexado percibido durante los últimos tres años de servicio, junto con su retroactivo pensional, indexación y costas procesales.

- **HECHOS**

Frente a los hechos manifiesta que nació el 15 de agosto de 1961. Que en calidad de trabajador oficial laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales –ISS- entre el 12 de diciembre de 1994 al 31 de marzo de 2015 desempeñando el cargo de conductor mecánico. Que la desvinculación del ISS obedeció a la culminación del proceso liquidatorio de dicha entidad. Que el 31 de octubre de 2001 Sintraseguridad Social suscribió convención colectiva de trabajo con el ISS estableciendo un régimen pensional más ventajoso que el legalmente establecido. Que era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por el ISS con Sintraseguridad Social. Que en la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 se concibió el régimen pensional de carácter convencional para estar vigente hasta el año 2017. Que mediante decreto 2013 de 2012 el Gobierno Nacional dispuso la liquidación del ISS culminando el 31 de marzo de 2015. Que en virtud de la liquidación del ISS, la UGPP asumió obligaciones pensionales que incumbían a dicha entidad. Que mediante resolución RDP 016107 del 24 de abril de 2015, la UGPP le negó la prestación reclamada. Que el 21 de octubre de 2020, con radicado SOP 202001033839, solicitó nuevamente a la entidad el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, en razón de haber completado más de 20 años de trabajo al servicio del ISS y contar con más de 55 años. Que por medio de la resolución sin número y sin fecha, radicado SOP 202001033839, la UGPP negó la petición asegurando que solo laboró al servicio del ISS 8 años, 6 meses y 14 días.

- **CONTESTACIÓN**

**UGPP:** Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones elevadas en su contra al señalar que carece de fundamentación fáctica y legal, por cuanto no le asiste razón al demandante pretender la pensión convencional. En consecuencia, solicita que se absuelva de todo cargo y se condene en costas al actor. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, compensación, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 19 de abril de 2022 el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín declaró que al demandante le asiste derecho a la pensión jubilación convencional regulada clausula 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 suscrita con el Instituto de Seguros Sociales, en cuantía inicial de \$2.201.357 a partir del 15 de agosto de 2016. Como consecuencia, condenó a la UGPP a pagar la suma de \$131.097.175 por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 26 de abril del año 2018 y hasta el 31 de marzo de 2022, monto que deberá ser indexado. A partir del 1° abril de 2022, la entidad deberá continuar pagando al demandante la suma de \$2.785.194 mensuales por concepto de la mesada pensional, sin perjuicio de las mesadas adicionales de diciembre de cada año y de los aumentos legales a futuro decretados por el Gobierno Nacional. Autorizó a la entidad demandada a los descuentos en salud. Las costas procesales fueron impuestas a cargo de la UGPP. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.

- **APELACIÓN:**

**Demandante:** La decisión anterior fue recurrida en apelación a través de su apoderado judicial en lo relacionado a la fecha a partir se reconoció la prescripción extintiva y en cuanto al retroactivo pensional. Señala que el fallador de primera instancia tomó como fecha para determinar la operancia de la prescripción extintiva aquella en la que se presentó la demanda, desconociendo la interrupción de la prescripción generada el 21 de octubre de 2020, fecha en la que el demandante efectuó la reclamación de la pensión de jubilación ante la UGPP. En consecuencia, la prescripción de las mesadas debió operar a partir del 21 octubre de 2017 y no a partir del 26 de abril de 2018, razón por la que debió reconocerse las mesadas pensionales causadas entre octubre de 2017 y abril de 2018, siendo procedente modificar el retroactivo pensional.

**UGPP:** La decisión anterior fue recurrida en apelación a través de su apoderada judicial solicitando se revoque la sentencia considerando que la Convención Colectiva de trabajo del ISS solo estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004. Que para que operase una vigencia extendida hasta el 31 de julio de 2010 o más debería existir un derecho adquirido emanado de una convención expedida con anterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005. Que en la sentencia SU-555 de 2014 se señala que para pensiones convencionales la edad no es un mero requisito de exigibilidad

sino un verdadero requisito de causación, igual que el tiempo de servicio. Que es claro que el demandante cumple la edad en fecha posterior a la terminación de sus servicios ISS; no obstante, la cláusula 98 convencional no contempló su aplicación a los trabajadores que al momento de finalizar su relación laboral no hayan cumplido la edad exigida para beneficiarse de dicha prestación. Finalmente, manifiesta que si al demandante le asiste el derecho a la pensión convencional, se tenga en cuenta y se adicione en la sentencia la compartibilidad pensional considerando que al ser una norma convencional y estar sujeta a dicha figura normativa, se deberá tener en cuenta al momento en el que el demandante cumpla la edad de ley para que esta prestación sea efectivamente compartida y se cancele el mayor valor si a ello hubiere lugar.

- **CONSULTA:**

También fue enviado el expediente a este Tribunal con el propósito que se conozca del proceso en grado jurisdiccional de consulta con ocasión de las condenas impuestas a la UGPP.

- **ALEGATOS:**

Fueron presentados por las partes en los siguientes términos:

**Demandante:** reiteró los argumentos expuestos en la apelación. Manifestó que el juzgado se equivocó en la fecha a partir de la cual tiene aplicación el fenómeno de la prescripción, toda vez que tiene incidencia en el monto del retroactivo pensional. Agregó que *“en el caso concreto como la reclamación administrativa se presentó el 21 de octubre de 2020 la prescripción de las mesadas pensionales debió operar a partir del 21 de octubre de 2017 y no a partir del 26 de abril de 2018 teniendo en cuenta el efecto de la interrupción debiendo entonces reconocerse las mesadas pensionales causadas entre el mes de octubre de 2017 y el mes de abril de 2018 que no fueron incluidas en el retroactivo pensional dispuesto por el juzgado de primera instancia”*

**UGPP:** Los alegatos fueron presentados en términos similares a los expuestos con la apelación. Solicitó revocar la decisión y se emita una sentencia absolutoria de las pretensiones invocadas en la demanda. Manifestó que *“el demandante cumple el tiempo de servicio señalado por la Convención colectiva incluso con posterioridad al término máximo establecido por el acto legislativo, es por ello que no es posible reconocer una PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL ya que, NO acreditó el cumplimiento de los requisitos, a saber, edad y tiempo de servicios al 31 de julio de 2010, en consecuencia no existe un derecho adquirido sujeto a protección alguno en sede judicial,*

*máxime cuando la voluntad del constituyente no fue otra que limitar su regulación entre particulares abiertamente diferente a lo ya consagrado en la Ley”.. Agregó además que “en el evento que la sala considere que en efecto le asiste derecho al accionante al reconocimiento y pago de la pensión convencional, solicito se indique que la misma procede hasta la fecha en que le sea pagada la pensión de vejez legal, momento para el cual, mi representada estará en la obligación de cancelar solo el mayor valor si a ello hubiese lugar en virtud de la figura de la compartibilidad pensional”*

## **CONSIDERACIONES:**

Solicita el demandante se le reconozca la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo para los trabajadores del ISS desde que cumplió 55 años de edad; el juzgado del conocimiento accedió a las súplicas de la demanda ordenando el pago de la prestación desde el 26 de abril del 2018, por haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción.

Atendiendo a la apelación formulada por las partes y que el proceso será conocido en grado de consulta, el problema jurídico para resolver por esta Sala se centrará en los siguientes temas: *i)* aplicación de la convención colectiva de trabajo; *ii)* beneficios convencionales con posterioridad al 31 de julio de 2010 como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005; *iii)* definir si se encuentran acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional; *iv)* liquidación de la pensión y excepción de prescripción; *v)* indexación; *vi)* Compartibilidad pensional y, *vii)* costas procesales.

### ***i) Aplicación de la convención colectiva de trabajo***

Se encuentra acreditado con la prueba documental obrante en el expediente que el demandante, señor Jesús Emilio Carmona Rúa, laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales -ISS- del 12 de diciembre de 1994 al 31 de marzo de 2015. Si bien, del contenido de la resolución con radicado SOP2020001033839, la UGPP refiere las mismas fechas de servicios, advirtió también acerca de una inconsistencia en estas fechas, indicando que el extremo final de la relación laboral fue 25 de junio de 2003 con la liquidación del ISS; sin embargo, la fecha inicialmente advertida se acredita con la prueba documental obrante en el expediente, en especial, el reporte de tiempos y salarios devengados por el actor al Servicio del ISS visible en las páginas 22 a 25, así como en el certificado emitido por la misma entidad que milita en la

página 26 del pdf “03Anexos”, demostrándose que el actor prestó sus servicios hasta marzo de 2015, en calidad de trabajador oficial.

Cómo lo pretendido por el actor es el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, se hace necesario aclarar que la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 estaría vigente hasta el 31 de octubre de 2004, salvo las excepciones establecidas en la misma, como lo es el artículo 98 que extiende la vigencia hasta el año 2017. Al respecto dijo la alta corporación:

*“En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente”*

Mismo criterio que estableció en sentencia SL1409-2015, donde clarificó que solo algunas cláusulas de la referida convención continuarían vigentes más allá del 31 de octubre de 2004, pero únicamente porque la misma convención así lo prevé, y estas cláusulas están relacionadas con derechos pensionales que necesariamente se iban a perfeccionar después del extremo final pactado en la norma convencional. Por ello, en materia pensional al demandante le es aplicable la convención colectiva de trabajo hasta el año 2017.

**ii) Beneficios convencionales con posterioridad al 31 de julio de 2010 como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005**

Se encuentra demostrado que el demandante nació el 15 de agosto de 1961, por lo que arribó a la edad de 55 años el mismo día y mes de 2016; laboró en calidad de trabajador oficial al servicio del ISS del 12 de diciembre de 1994 al 31 de marzo de 2015; la Convención Colectiva de Trabajo, la cual cuenta con su respectivo sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de Trabajo estableció su vigencia general hasta el 31 de octubre del 2004 y no fue objeto de denuncia, de manera que por efecto del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo se prorrogó automáticamente por períodos sucesivos de seis meses; el demandante es beneficiario de dicha convención.

El Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que empleadores y

organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones, pero a fin de no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, se reguló en el párrafo 3º un período transitorio así:

*“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”*

De lo anterior se deducen dos postulados diferentes: *i*) para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendrá hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo; y, *ii*) para aquellas convenciones que se establecieran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes. Frente al primer postulado, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que<sup>1</sup>:

*“con base en esta lectura del párrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.”*

Expuso la Corte que la expresión “*término inicialmente pactado*” aludía al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que “*si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara*”, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010. Y que, con ese alcance interpretativo podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años.

Tal criterio varió en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y SL2986-2020, dándose un alcance diferente al párrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, al considerarse de una parte que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio 2010, y de otro lado que ese plazo

---

<sup>1</sup> Sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en sentencias CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019.

también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 de julio de 2005. Al respecto se indicó en la primera de estas sentencias:

*“En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá **por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo** cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010...”* negrilla fuera de texto original.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones del Comité del Libertad Sindical adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar *“las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento”*, sostuvo:

*“La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se **mantengan hasta su vencimiento** los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término **haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010**. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del párrafo transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, **se mantendrán por el término inicialmente estipulado**”. Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004.*

*[...] Además, como se indicó en precedencia, también con el párrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron **mientras continuara vigente**, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.*

*Esto es justamente lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Párrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.*

*Y todo lo anterior, garantiza también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical”. (Negrillas fuera de texto original).*

De lo anterior se colige que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubra un período superior al 31 de julio de 2010, debe respetarse al ser voluntad de las partes otorgar mayores garantías a las normas jubilatorias.



Así lo consideró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al rectificar el criterio adoctrinado en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020. Y a partir de la sentencia SL3635-2020, precisó que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior al 31 de julio de 2010

*“debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.*

*Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia.*

*Ello, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convención colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante el tiempo en que la misma o algunas de sus cláusulas conserven su vigencia, de modo que su ámbito de protección cobija los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el término pactado.”*

Se itera, como a partir de esta última sentencia la Sala Laboral de la Corte rectificó parcialmente su criterio en materia de pensiones consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, de modo que las pautas que regulan actualmente el asunto son las siguientes:

*“a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.*

*b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.*

*c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.”*

En el presente asunto el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrado en la convención colectiva de trabajo 2001-2004 que, a su juicio, previó, respecto de algunas cláusulas, una vigencia mucho más amplia que el plazo general. Para verificar lo anterior se tiene que, el artículo 2º de dicho acuerdo colectivo dispone:

*“Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”*

Así mismo, el artículo 98 regula las reglas para la pensión de jubilación solicitada, así:

**“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN**

*El trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:*

*(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.*

*(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.*

*(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.*

*Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:*

- a. Asignación básica mensual.*
- b. Prima de servicios y vacaciones.*
- c. Auxilio de alimentación y transporte.*
- d. Valor de trabajo nocturno, suplementario y en hora extras.*
- e. Valor de trabajo en días dominicales y feriados.*

*No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez (...)*

Bajo el contexto anterior se evidencia que, frente al tema de pensión de jubilación, las partes dispusieron una vigencia posterior o diferente a la establecida de forma general, asunto que fue advertido por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1409-2015, así:

*“En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva (sic) al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente”*

Asimismo, en la ya citada sentencia SL3635-2020, donde dicha corporación rectificó parcialmente su criterio, fue clara al indicar la vigencia de la convención:

*“En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia.”*

El criterio jurisprudencial establecido en esta sentencia ha sido reiterado, entre otras, en las siguientes providencias: SL5116-2020, SL2773-2021, SL4163-2021, SL4904-2021. Igual criterio es el acogido por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL4234-2021, SL5131-2021, SL5490-2021, SL595-2022, SL516-2022, SL399-2022, SL595-2022, SL626-2022 y SL042-2023.

La mayoría de los integrantes de esta Sala de Decisión Laboral del Tribunal eran del criterio que un trabajador no podía beneficiarse de pensiones convencionales cuyo estatus se causara con posterioridad al 31 de julio de 2010, en atención al límite referido en el Acto Legislativo 01 de 2005; no obstante, tal criterio merece ser reevaluado en atención a la jurisprudencia del órgano de cierre de la justicia ordinaria. Y es que, al haberse referido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en más de tres (3) oportunidades sobre este asunto, se constituye doctrina probable conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, siendo pertinente resaltar que *“todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades (...) se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional.”*, según lo indicado en la sentencia C-539 de 2011, por lo que este despacho comparte y a su vez continuará acogiendo esta.

**iii)      *Acreditación de los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional***

Se establecerá si el demandante acredita las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 98 convencional para obtener la pensión de jubilación reclamada.

En el caso concreto deben señalarse los siguientes momentos históricos relevantes: el demandante acreditó 20 años de servicios al servicio del ISS en diciembre de 2014; arribó a la edad de 55 años el 15 de agosto de 2016; laboró

a la entidad hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en que fue liquidada definitivamente.

Como consecuencia de lo anterior se generan los siguientes interrogantes; **1)** ¿a partir de qué momento se causa el derecho a la pensión convencional?; **2)** ¿Es o no beneficiario de la prestación convencional por haber arribado a los 55 años de edad el 15 de agosto de 2016 y haber laborado hasta el 31 de marzo de 2015?

Estos interrogantes fueron resueltos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3343-2020, al interpretarse el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS, así:

*“Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política.*

*Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adocrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.*

*Ahora bien, la referida normativa convencional prevé lo siguiente:*

*El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (...).*

*En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad.*

*Lo anterior, en tanto si bien el artículo alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en últimas, es lo que exige la norma referida.*

*Al respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cláusula convencional (art. 98), el derecho pensional allí consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condición futura, connatural al ser humano.*

*Específicamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestación de los servicios personales en favor de un empleador, de tal suerte que, además de compensar el deterioro laboral, también funcionan como premio a la fidelidad con aquel.*

*Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476*

*del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación.*

*Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación.”*

De lo anterior se desprende que la pensión convencional se reconocerá cuando el causante acredite 20 años de servicios y 55 años de edad; no obstante, el derecho puede ser adquirido cuando al momento del retiro el extrabajador tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad, por cuanto es con el primero de estos que se adquiere la prestación, pues esta tiene como finalidad compensar el desgaste físico sufrido por el trabajador como consecuencia de los años de servicios. Y, frente a la edad, es una condición futura, connatural al ser humano.

En la sentencia SL3343-2020, acabada de citar, la Corte advierte que, si bien frente a la interpretación que debe dársele al artículo 98 de la convención, es a partir de esta sentencia que se fija la forma como debe interpretarse tal artículo.

Así las cosas, acogida la interpretación del órgano de cierre, es acertada la decisión tomada por el juzgado del conocimiento, esto es, que la pensión convencional se adquirió en el año 2014, una vez el señor Jesús Emilio Cardona Rúa acreditó 20 años de servicios como trabajador oficial, pero que la misma se reconocerá una vez arribó a los 55 años de edad en el año 2016. En este escenario, le asiste derecho al demandante a la pretendida pensión de jubilación convencional.

#### ***iv) Liquidación de la pensión y excepción de prescripción***

Esta Sala comparte la liquidación realizada por el juzgado del conocimiento, teniendo en cuenta el numeral (ii) del artículo 98 de la convención colectiva 2002-2004, esto es, el 100 % del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, valor que actualizado al año 2016, momento del reconocimiento de la prestación, asciende a \$2.201.357.

Previo a realizar pronunciamiento acerca del valor por concepto de retroactivo pensional se hace necesario estudiar la excepción de prescripción propuesta por la demandada.

Alega el demandante que no debe proceder el medio excepción de la prescripción desde la fecha indicada por el juzgado, toda vez que esta se interrumpió con la reclamación realizada ante la demandada el 21 de octubre de 2020, por lo que es a partir de este momento en que debe contabilizarse el término de tres años de prescripción.

Pues bien, el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 4º de la ley 712 de 2001, referente a la reclamación administrativa, establece que las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Añadió el artículo que mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.

A su turno, el artículo 151 de la misma codificación establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Debe precisarte en este punto de la providencia la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción. El primero de los términos da lugar con el simple reclamo escrito ante la entidad, lo que genera como consecuencia que la prescripción se interrumpa por un término de tres años; el segundo de los términos refiere a que, mientras se agota la reclamación administrativa, el término prescriptivo se suspende, lo que conlleva a que, una vez se dé dicho agotamiento, el término de prescripción comenzará a contabilizarse.

El demandante elevó tres solicitudes ante la UGPP del reconocimiento de la pensión de jubilación convencional. Del contenido de la resolución RDP 016107 del 24 de abril de 2015 se desprende que la primera de ellas se radicó el 9 de diciembre de 2014, aunque se debe aclarar que para esta fecha no se tenía derecho a reclamar a la prestación, toda vez que, como se advirtió anteriormente, este momento tuvo lugar cuando el señor Carmona Rúa cumplió 20 años de servicios al ISS y arribó a los 55 años de edad, hecho que sucedió el 15 de agosto de 2016; la segunda de las reclamaciones tuvo lugar

el 8 de mayo de 2017 según se lee del contenido de la resolución RDP 033325 del 28 de agosto de 2017 momento para el cual el actor ya cumplía con el lleno de los requisitos para tener derecho a la pensión pretendida; finalmente, la última de las reclamaciones se realizó el 21 de octubre de 2020 según el contenido de la resolución con radicado SOP202001033839.

Si bien la prescripción se interrumpe por una vez, esta se contabilizará desde el agotamiento de la reclamación realizada en el año 2017, pues si bien la solicitud del reconocimiento de la prestación se realizó el 8 de mayo de 2017, el termino de prescripción se suspendió hasta el día 28 de agosto del mismo año cuando la entidad resolvió la solicitud, toda vez que para tal época ya existía en cabeza del demandante el derecho a la prestación de jubilación; de otra parte, la demanda fue presentada por fuera del termino trienal de prescripción de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que esta se promovió el 26 de abril de 2021.

Así las cosas, no le asiste razón al demandante al señalar que la prescripción se interrumpió con la reclamación realizada el 21 de octubre de 2020, por lo que la decisión de instancia merece ser confirmada en tal sentido.

Con relación al retroactivo pensional, la liquidación realizada por el juzgado se ajusta a derecho, ya que las mesadas adeudadas del 26 de abril del 2018 al 31 de marzo del 2022 ascienden a \$131.097.175.

#### **v) Indexación**

Es de advertir que los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real.

Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con radicado 86405 ha expresado:

*“...Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real.*

*Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema de pensiones, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza, en el marco de la protección especial a la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda...”*

En este escenario, es acertada la decisión del juzgado del conocimiento de condenar a la demandada al pago de la indexación de las mesadas pensionales objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, expedida por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

#### **vi)      *Compartibilidad pensional***

Señala la UGPP que en caso de que al demandante le asista derecho a la pensión convencional, la sentencia deberá ser adicionada en lo que respecta a la compartibilidad pensional, advirtiendo que al ser una norma convencional y estar sujeta a dicha figura normativa, se deberá tener en cuenta al momento en el que el demandante cumpla la edad de ley para que esta prestación sea efectivamente compartida y se cancele el mayor valor si a ello hubiere lugar.

Si bien esta Sala es del criterio que, en caso de haber derecho a la pensión legal de vejez junto con la convencional de jubilación, es necesario decretar la compartibilidad pensional; sin embargo, en el presente asunto, atendiendo a que el demandante no percibe actualmente la pensión legal de vejez, esta Sala no se puede pronunciar frente al tema, por ser incierto.

No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que la compartibilidad pensional opera por ministerio de la ley, sin necesidad de declaratoria judicial. Así se pronunció tal corporación en sentencia SL4342-2022:

*“Sobre el particular es preciso reiterar que la compartibilidad pensional opera por ministerio de la ley, «esto es, sin necesidad de declaratoria judicial en virtud del artículo 18 del Decreto 758 de 1990» (CSJ SL4278-2017). Por tanto, si en el futuro el demandante adquiere el derecho a la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993, por mandato directo del artículo 18 del Decreto 758 de 1990 la entidad está autorizada para decretar la compartibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la de vejez reconocida por Colpensiones, sin que para ello requiera una orden judicial.”*



**vii) Costas procesales y alegatos**

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. En la segunda instancia no se causaron debido a que las apelaciones formuladas por las partes no salieron adelante.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por las partes.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

Se **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta, de fecha y procedencia ya indicada.

Costas procesales como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	Jesús Emilio Carmona Rúa
<b>DEMANDADO</b>	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-008-2021-00174-01
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia
<b>MAGISTRADO PONENTE</b>	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**  
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**  
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la 5:00 pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO